

Ante la grave situación en Venezuela hacemos un llamado al Gobierno colombiano para que tome acciones concretas

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2024. Como organización de la sociedad civil comprometidos con la defensa de los principios y valores de la democracia liberal, desde el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga expresamos nuestra profunda **preocupación por la situación actual en Venezuela.**

Dadas las **irregularidades** en las elecciones del 28 de julio de 2024 y la **represión ejercida** por las fuerzas de seguridad de Venezuela contra los **opositores y ciudadanos**, que legítimamente han expresado sus inconformidades contra el régimen de Nicolás Maduro, es crucial que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tome acciones concretas para demostrar su compromiso con los principios democráticos que han caracterizado a Colombia.

La **ambigüedad o inacción** en este momento crítico podría ser interpretada como un apoyo tácito al régimen de Maduro y sus violaciones de derechos humanos contra la población civil.

Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que tome una postura firme y coherente con los valores democráticos de nuestra sociedad. La situación en Venezuela exige una respuesta clara, especialmente de Colombia, por las consecuencias económicas, políticas y de seguridad para la región.

En este sentido, resulta fundamental que el Gobierno nacional:

- **Reconozca la legitimidad de Edmundo González Urrutia:** como presidente electo por la mayoría del pueblo venezolano como lo han hecho otros gobiernos. Las actas de la oposición reflejan la realidad electoral, legitimando los resultados. Informes del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA) evidencian las numerosas irregularidades del CNE, que también incumplió los plazos para la publicación oficial de las actas electorales.
- **Exija el cese de la represión a la oposición:** el Gobierno colombiano debe condenar la violencia contra los opositores en Venezuela, incluidos los asilados en la embajada de Argentina y los detenidos arbitrariamente. Es crucial que Colombia defienda los derechos políticos de María Corina Machado y de los demás opositores perseguidos. Dado que el presidente Gustavo Petro ha abanderado la defensa de los derechos políticos en foros internacionales, se espera que actúe con coherencia en el caso de Venezuela.
- **Sea claro en el discurso sobre la violencia:** en sus pronunciamientos, el Gobierno colombiano debe evitar equiparar las acciones violentas del régimen de Nicolás Maduro con las protestas pacíficas de ciudadanos que exigen derechos y una transición democrática sin dilaciones.

Deben condenarse las acciones represivas del régimen de Maduro, que persigue, encarcela, tortura y asesina a los opositores. No se pueden aceptar equivalencias morales entre ambas partes, ya que múltiples fuentes han documentado los crímenes cometidos contra los manifestantes y opositores por las fuerzas estatales y otros grupos violentos de Venezuela.

Esa represión podría desencadenar una nueva ola migratoria, la cual tendría efectos directos en Colombia.

- **Sea transparente en el papel del Gobierno colombiano en posibles negociaciones o acuerdos:** si el Gobierno colombiano está contribuyendo en negociaciones con actores en Venezuela y terceros países, debe informar oportunamente a la opinión pública.

Es importante que estas no se conviertan en un mecanismo para perpetuar el régimen de Nicolás Maduro en el poder sin reconocer los resultados electorales ni cumplir con acuerdos previos sobre una transición pacífica. Cualquier esfuerzo diplomático debe facilitar una transición genuina que refleje la voluntad del pueblo venezolano.

El Gobierno colombiano debe garantizar la inclusión de María Corina Machado, principal líder opositora en Venezuela, en cualquier negociación. Excluirla sería inaceptable. A pesar de las restricciones del régimen de Nicolás Maduro que le impidieron participar como candidata, Machado ganó las primarias con más del 90% de los votos y representa la unidad de la oposición venezolana.

Desde el ICP nos mantenemos firmes en nuestro propósito de trabajar por una región en la que prevalezca la democracia liberal, la libertad y el Estado de derecho.